

**ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO
INSTITUCIONAL 2020**





En mi recientemente asumida función como Presidente del Consejo Directivo de SEPADE, he sido invitado para compartir con ustedes algunas orientaciones generales para el trabajo institucional, en el contexto de la nueva situación que estamos viviendo como país a partir del estallido social iniciado en octubre pasado, y de un inédito proceso constituyente previsto para los próximos dos años que, como ya podemos observar, genera tanto esperanzas como temores.

Mi propósito es basar tales orientaciones en la identidad e historia de SEPADE, condensada en algunos documentos e hitos específicos, y contextualizada para el momento actual a partir de las visiones y el espíritu que se manifestó en el diálogo entre las y los integrantes de la Asamblea de la Corporación, en su sesión ordinaria del 7 de diciembre pasado.

No obstante que el llamado “estallido social” se generó a partir de algunas situaciones específicas (alza del precio del Metro de Santiago; declaraciones desatinadas de algunos ministros; movimiento de evasión iniciado por estudiantes, etc.), existe un amplio consenso de que sus causas más profundas e interconectadas entre sí, son la extrema *desigualdad* que ha persistido en la sociedad chilena post-dictadura, y la crisis de legitimidad de la institucionalidad política del país.

Según un documento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “la desigualdad socioeconómica en Chile no se limita a aspectos como el ingreso, el acceso al capital o el empleo, sino que abarca además los campos de la educación, el poder político y *el respeto y dignidad con que son tratadas las personas*. Esto afecta en mayor grado a las mujeres, la población rural y de las regiones retrasadas, los pueblos originarios, y a personas de diversas minorías.”¹ La frase destacada en cursivas en este documento, publicado dos años antes del estallido social, apunta al aspecto central que marca la subjetividad de la ciudadanía movilizadora: la sensación permanente de maltrato, que explica la centralidad que ha tenido la demanda de trato digno, y la pérdida de confianza en una institucionalidad que no ha sido capaz de garantizar el respeto de la *dignidad* de todas las personas.

Estas dos dimensiones centrales de la crisis (desigualdad y pérdida de legitimidad de la institucionalidad) han sido temas fundamentales para la razón de ser SEPADE desde su nacimiento, tal como se expresa en el documento “Orientaciones institucionales sobre la política nacional”, redactado con ocasión de su 30 aniversario y en la víspera de un nuevo periodo campaña electoral.

Al cumplirse 30 años del nacimiento de SEPADE, es conveniente destacar que surgió como una respuesta a una situación socio-política profundamente crítica y dolorosa, especialmente para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Tal respuesta no era sólo coyuntural, ya que portaba una visión crítica y un anhelo profundo de justicia y libertad, en un Chile donde los

¹ Síntesis: *DESIGUALES. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile*. PNUD, junio 2017, p. 5.



derechos humanos (políticos, económicos, sociales y culturales) eran cotidianamente pisoteados; donde el temor y la inseguridad constituían el clima social predominante.

Con esta frase se hace referencia a que los primeros pasos de la trayectoria institucional se dieron precisamente en una situación de enorme precariedad e indefensión de los sectores más pobres de la sociedad chilena. Pero eso no implica que la acción institucional se redujera a lo social. En un contexto en que la acción política estaba no solamente prohibida, sino que era constantemente descalificada, “las ONGs, entre ellas SEPADE, contribuyeron decisivamente a crear conciencia y estimular la participación socio-política de los sectores sociales con que trabajaban. Muchas sirvieron también como espacios de debate y difusión de propuestas políticas alternativas al régimen dictatorial.”

Durante los últimos años de la dictadura, especialmente con el escenario abierto con la convocatoria a Plebiscito y luego elecciones presidenciales y parlamentarias, SEPADE estimuló abiertamente la participación de la ciudadanía en el camino de lucha política a favor de la recuperación de la democracia. Los equipos institucionales abrimos espacios de discusión política, estimulamos la inscripción electoral y, posteriormente, contribuimos a la formación de vocales y apoderados de mesa, tanto para el Plebiscito [de 1988] como en las elecciones de 1989.

Tras el retorno a la democracia, una vez que los partidos políticos recuperaron su rol privilegiado como instrumentos de la acción política, desde muy temprano nos preocupó su distancia respecto a las organizaciones de la sociedad civil:

Esta brecha, perjudicial para la democracia y para el protagonismo de la sociedad civil en la construcción de una sociedad más justa y acogedora, constituye un factor que aumenta la desigualdad existente en nuestro país. Así como se concentra el poder económico, así también lo hace el poder político. Chile se arriesga a continuar siendo una democracia donde las decisiones políticas son propiedad de la llamada “clase política”, mientras las grandes mayorías se mantienen alejadas de las decisiones y de la configuración del escenario de su propio futuro.

Con este trasfondo, y ante la proximidad de un escenario de campaña electoral, se formularon las siguientes orientaciones que vale la pena recordar dada la actual situación del país:

Democracia:

No somos indiferentes ni neutrales a la hora de pronunciarnos sobre el tipo de régimen político al que aspiramos. Nacimos para recuperar la democracia, por lo tanto trabajamos para fortalecerla y profundizarla. Creemos en la



democracia no sólo como sistema de gobierno para el país, sino también para los gobiernos locales y las organizaciones sociales.

Profundización de la democracia:

No nos satisface enteramente la democracia que hasta ahora hemos alcanzado. Está demasiado atada todavía a mecanismos autoritarios y poco representativos. Hay demasiada exclusión e injusticia en muchos de los mecanismos heredados de la Dictadura. Nos interesa que exista real representación y participación política de todos los sectores y corrientes de pensamiento. Necesitamos más reconocimiento a muchos derechos sociales, económicos y culturales. Por sobre todas las cosas, nos interesa que se creen mecanismos de participación y control social en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Estamos a favor de la inscripción automática en los registros electorales, como una manera de alentar y facilitar la participación ciudadana, especialmente de los jóvenes.

Participación ciudadana en las decisiones políticas:

Tampoco nos satisface el nivel de participación que la ciudadanía tiene en la toma de decisiones, tanto en el nivel nacional, como regional y local. Estamos abiertamente por estimular, apoyar y fortalecer procesos de descentralización política en el nivel de las regiones y comunas. Aspiramos a mayores niveles de autonomía regional y local. Chile nos parece todavía un país centralista e injusto en las relaciones entre el centro y las regiones, e incluso al interior de estas últimas. Esta aspiración responde no sólo a razones de igualdad política, sino también a la convicción de que la lucha contra la pobreza es más efectiva cuando las regiones y las localidades cuentan con mayores recursos y poder para definir estrategias y políticas pertinentes.

Revaloración de la política como actividad legítima y necesaria:

La política puede ser para quienes la ejercen una actividad digna, transparente, eficiente y altamente satisfactoria. Así lo ha sido en muchos periodos de la historia de Chile, y lo es en cualquier lugar donde es desarrollada con la mira puesta en los demás, y no en el beneficio personal. Bastante del desprestigio actual de la política es herencia ideológica del régimen anterior. Pero una cuota importante de responsabilidad la tienen personas que han ejercido funciones políticas y públicas en el actual período democrático. Esto puede decirse especialmente de quienes han perdido de vista a las organizaciones sociales y las comunidades organizadas, de quienes salvaguardan primero las pequeñas o grandes cuotas de poder, antes de velar por el interés público.

El distanciamiento del mundo político del mundo social le hace daño al país y a nuestro anhelo de una sociedad más justa y acogedora. Nos preocupa el



desprestigio de la política, porque alienta la falta de compromiso con el sistema democrático y porque favorece el surgimiento y extensión de valores individualistas y corporativos. Nos interesa destacar las buenas prácticas en política, en particular todas aquellas que alienten la transparencia en la gestión de los recursos; la participación ciudadana; la educación y formación política especialmente de la juventud; la descentralización política; y la lucha por reconocimiento de derechos de la ciudadanía.

En concordancia con este diagnóstico y las orientaciones que de allí se derivaron, durante gran parte de los años que siguieron SEPADE definió como problema principal a abordar mediante su trabajo la persistencia en la sociedad chilena de “significativas desigualdades, tanto en las oportunidades para acceder a una formación de calidad y participar en el desarrollo, como en las posibilidades efectivas de incidir en los procesos de toma de decisiones públicas. Estas desigualdades afectan negativamente tanto a sectores en situación de pobreza, como a grupos discriminados por otras causas (principalmente culturales, étnicas, religiosas y de género).” En consecuencia, definió como su objetivo general contribuir a “ampliar las oportunidades de acceso a una formación de calidad, de participación en el desarrollo, y de incidencia en la toma de decisiones públicas, para los sectores que viven en situación de pobreza y los grupos afectados por diversas formas de discriminación, en los territorios de intervención institucional.”

En el ámbito de su “Programa de Desarrollo y Participación Ciudadana”, gran parte de su quehacer se concentró precisamente en promover mecanismos más directos de participación democrática, especialmente en el ámbito comunal, como también a participar en el debate sobre mecanismos de democracia directa en el ámbito nacional.

Todo lo dicho hasta aquí revela un alto nivel de convergencia o coincidencia entre el diagnóstico institucional sobre la situación del sistema democrático en Chile y su interrelación con la persistencia de la desigualdad, y la interpretación de las causas del estallido social, *lo que nos permite mirar el proceso constituyente que se ha abierto como una gran oportunidad para el país, en la medida en que se comprenda que la redacción de una Nueva Constitución apunta exclusivamente a resolver la crisis de legitimidad de la institucionalidad política del país, y que no es la panacea para resolver las graves desigualdades sociales y políticas.*

Pero al mismo tiempo, las diversas formas en que se ha manifestado el descontento, desde las formas absolutamente pacíficas hasta otras extremadamente violentas; la heterogeneidad de las consignas y demandas, incluso a veces contradictorias; la tendencia a privilegiar la calle por sobre espacios de deliberación como método para obtener resultados; muestran que la pérdida de confianza en la institucionalidad democrática es prácticamente absoluta, particularmente entre las nuevas generaciones.



Una cosa es reconocer los aspectos antidemocráticos de la actual Constitución, y la ausencia de mecanismos de democracia directa (que faciliten la participación ciudadana en decisiones públicas específicas); y otra cosa es suponer que un país pueda ser gobernado desde la calle, con toda la población en estado de asamblea, sin ningún tipo de delegación de representación. Desde ya, la misma convocatoria a una Convención o Asamblea Constituyente, supone delegar representación a las personas que integrarán dicha instancia.

Sin embargo, el reciente episodio de boicot a la PSU convocado por organizaciones estudiantiles, sin importarles que una gran mayoría de estudiantes deseaba y esperaba poder rendirla, evidencia que hay un sector importante de la población movilizadora que parece no tener ningún interés por contribuir a las condiciones necesarias para el éxito del itinerario constituyente abierto con el “Acuerdo por la paz social y una Nueva Constitución” del 15 de noviembre pasado. En el otro extremo, senadores y diputados de partidos políticos de derecha firmantes del acuerdo, se excusan en este tipo de comportamientos para anticipar su rechazo a la redacción de una Nueva Constitución, demostrando así que anteriormente respaldaron dicho acuerdo más por miedo que por convicciones democráticas.

Esto último muestra que si no pasamos pronto de este clima de agitación permanente a un clima de diálogo y reflexión, hay un alto riesgo de que, como país, dejemos pasar de largo la oportunidad que se abrió con el acuerdo del 15 de noviembre, el que obviamente no habría sido posible sin el estallido social.

Ahora bien, ¿qué pasará si en el Plebiscito del 26 de abril gana la opción “rechazo”? Eso es difícil de predecir. La sensación que parece seguir viviéndose entre las personas y grupos más activos en las movilizaciones sociales, que por lo demás tienden a comunicarse casi exclusivamente entre sí, es un clima de entusiasmo por un “despertar” que estaría conduciendo al país irreversiblemente hacia una nueva sociedad más justa. Me temo que el riesgo de que la situación evolucione hacia una salida de extrema derecha, como ocurrió en Brasil con el Presidente Bolsonaro, o como lo que está ocurriendo en Bolivia, es mucho mayor que el que la gente alucinada con el “despertar” parece dispuesta admitir, y esto es especialmente preocupante si se reconoce la fuerza creciente del cristianismo conservador, tanto católico como evangélico.

Volviendo el foco a las orientaciones para el trabajo institucional, resulta valioso recordar una vez más lo que se dijo en el mencionado documento del año 2005:

SEPADE no debe permanecer indiferente o dejar que las campañas pasen por el lado, menos aún si ellas están favoreciendo formas de participación política [que son] negativas y perjudiciales para el fortalecimiento de las organizaciones. Sin embargo, no es el papel de SEPADE participar apoyando directamente una determinada alternativa política, por más cercana que se encuentre a las opciones y objetivos institucionales. En ningún caso se debe poner en duda el respeto institucional por el pluralismo y la diversidad.



De la misma manera que alentamos y apoyamos esta forma de ejercicio de ciudadanía política desde la acción institucional, respetamos el legítimo derecho que nuestros funcionarios tienen de comprometerse activamente, en forma personal, con las candidaturas que sean coherentes con sus propias opciones políticas. Pero deben tener el cuidado de dejar siempre en claro cuándo están actuando a título personal, y cuándo lo están haciendo en representación de la institución. En ningún caso están autorizados para utilizar recursos institucionales (vehículos, oficinas, dinero, actividades programáticas, etc.) para la realización de actividades derivadas de sus compromisos políticos personales.

En ese entonces el escenario era el de una campaña electoral (presidencial y parlamentaria) anterior al nuevo ciclo de movilizaciones sociales, y con un SEPADE trabajando en los ámbitos de la educación, de la participación ciudadana y del fomento productivo. Ahora que estamos en un escenario con altos niveles de movilización y conflictividad social, y que nuestro trabajo está centrado fundamentalmente en la educación general, con una apuesta por la Nueva Educación, queremos actualizar tales orientaciones tomando prestadas algunas de las palabras compartidas por Coral Regi (Directora de la Escuela Virolai, Barcelona), en su visita al Liceo Agrícola de Negrete el 10 de diciembre pasado:

Estamos en un momento de catarsis social y eso es bueno, eso nos da esperanza y es muy positivo. ¡Pero atención!: La función de la escuela no es educar activistas. La escuela que educa activistas es la escuela que adoctrina, y eso es propio de dictaduras de una o de otra parte. La escuela tiene que educar personas con sentido crítico, personas que se cuestionen y que fundamenten su pensamiento no en la consigna de algún profesor, de algún político, o de alguna figura, sino personas que realmente fundamenten su conocimiento y posición personal justamente en base a una reflexión serena, en una reflexión con sentido crítico. Hemos de educar ciudadanos/as comprometidos/as en base a la razón.

La clave está en recordar permanentemente que la *nueva educación* ya no cree en la enseñanza, sino en la *facilitación de proceso colaborativos de aprendizaje, centrados en las y los estudiantes, respetados en su dignidad y reconocidos en sus potencialidades.*² En la medida que el calendario del año 2020 (y probablemente también el año siguiente) estará cruzado por los hitos del proceso constituyente (lo que obviamente dependerá de los resultados del Plebiscito del 26 de abril), es altamente probable que será un factor relevante en las preguntas e inquietudes significativas que emerjan en las y los estudiantes, lo que posiblemente influirá en su elección de temas para sus proyectos de aprendizaje. *Nuestra tarea, por lo tanto, no será distinta a la de cualquier otra temática escogida: impulsar procesos de*

² En este sentido, es posible afirmar que nuestra apuesta por una *nueva educación* es, por sí misma, un aporte a la superación de la desigualdad y el mal trato en el ámbito educacional (recordando la cita al documento *DESIGUALES*, del PNUD).



investigación, discusión, reflexión crítica, aspectos que son fundamentales en la experiencia de participación democrática.

No obstante que el trabajo institucional está actualmente concentrado fundamentalmente en el ámbito de la educación general, nuestros establecimientos educacionales mantienen estrechos vínculos con organizaciones sociales y productivas de su entorno, y SEPADE en cuanto tal también mantiene vínculos con diversos actores sociales e institucionales, principalmente en las regiones del Biobío y Metropolitana, ámbitos en los que siempre está abierta la posibilidad de identificar oportunidades para desarrollar nuevos proyectos que tengan factibilidad de financiamiento, y sean coherentes con las líneas de trabajo institucional. Por lo tanto, con la proximidad del Plebiscito de entrada al proceso constituyente (26 de abril) y (de ganar la opción “acepto”) del proceso constituyente propiamente tal (que se extendería hasta fines de 2021 o comienzos de 2022), con mucha probabilidad se presentarán desafíos, oportunidades y demandas de apoyo relacionadas con este inédito proceso de participación ciudadana para construir un nuevo pacto social para Chile.

En el espíritu de la vocación institucional por contribuir a fortalecer y profundizar la democracia como sistema de gobierno, alentamos la participación de nuestros equipos de trabajo en iniciativas (de difusión y/o formación) propias, o en asociación con otros actores, que propendan *a promover la participación informada, responsable y reflexiva de todas las personas habilitadas para votar en las diversas etapas del proceso constituyente*, así como su participación activa en los espacios de deliberación (cabildos u otras instancias de reflexión y debate ciudadano) que se generarán durante el proceso.

En lo que respecta a la participación personal en el proceso constituyente de los y las integrantes de nuestros equipos, vale la misma orientación ya citada del documento del año 2005.

Juan Sepúlveda González
Presidente del Consejo Directivo de SEPADE
15 de enero de 2020